

## **¿Discriminación de las personas no binarias en acciones afirmativas dentro del ámbito electoral? Análisis de la sentencia SUP-JDC-74/2022 y acumulado**

### **Introducción**

En una reciente sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (en adelante Tribunal Electoral o TEPJF) analizó el tema de la igualdad y discriminación que alegaron vulnerado dos personas que se identificaron como no binarias al no sentirse incluidas para participar en una convocatoria exclusiva hacia mujeres para ocupar la presidencia y algunas consejerías de los Institutos electorales de algunas entidades federativas (OPLES).

De ahí que, en nuestro trabajo analizaremos dicha sentencia del Tribunal Electoral por ser un asunto novedoso y de interés para ir examinando cómo se van analizando temas nuevos como el de las personas no binarias. Más aún, contamos con varias hipótesis acerca de los alcances que tiene la sentencia del Tribunal Electoral, las cuales podemos englobarlas en las siguientes preguntas: ¿es la resolución progresista y comprende tanto los conceptos como realidades de las personas no binarias? O por el contrario ¿es una sentencia que no vislumbra las realidades de las personas no binarias ni su terminología?, sumado a que nos cuestionamos si ¿la resolución engloba de forma adecuadamente a las personas no binarias en las acciones afirmativas dirigidas a las mujeres?

En busca de dar respuesta a estas hipótesis, para nuestra metodología de análisis de la sentencia en cuestión, primero dilucidaremos sobre conceptos clave como sexo, género, identidad de género y personas no binarias, entre otros, con la finalidad de tener claridad de los significados de dichos términos que son abordados

en la sentencia sin mayor profundidad, así como también abordaremos una visión crítica hacia dichos conceptos y las complejidades que se presentan para tratar de definirlos, con lo cual, buscaremos tener una luz clara que nos permita comprender las consecuencias de la decisión judicial del Tribunal Electoral.

De igual forma, realizaremos un breve estudio comparado de cómo se encuentra regulado jurídicamente la situación de las personas no binarias en países como Alemania, Países Bajos, Malta, entre otros, con la intención de tener un panorama internacional de la compleja y desfavorable situación de las personas no binarias para lograr su reconocimiento jurídico para después dar paso a la situación fáctica y jurídica en la que actualmente se encuentran las personas no binarias en México en años recientes, panorama que nos muestra el que hasta hace poco se han implementado una serie de medidas para su reconocimiento.

Una vez analizado con rigor los conceptos clave de la sentencia que nos den pauta para entender en su justa dimensión lo “no binario” con sus retos y complejidades, así como ver que las discusiones conceptuales se traslapan a la hora de regular la situación jurídica en las disposiciones normativas; ahora sí, podemos dar paso al segundo paso en nuestro estudio consistente en analizar los hechos del asunto resuelto por el Tribunal Electoral y de igual manera, mencionaremos algunas razones y consideraciones que se vierten en la sentencia para resolver el caso.

En otro apartado, veremos en qué consiste el principio a la igualdad y no discriminación (derecho alegado como vulnerado por las personas binarias), por lo que, nos remitiremos a documentos jurídicos y a sentencias o tesis que han desarrollado para darle contenido a este principio tanto la Corte Interamericana de

Derechos Humanos (CoIDH) como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el fin de conocer la protección a la que son sujetas las personas no binarias bajo el alcance de dichos conceptos jurídicos desarrollados por los tribunales. En un último momento, examinaremos la sentencia y para ello echaremos mano de bibliografía especializada sobre el tema y haremos referencia a lo resuelto por la Corte Constitucional colombiana sobre el asunto, para tener las herramientas que nos permitan dar un enfoque crítico a la sentencia base a examinar.

Esto es, nuestra metodología consistirá en tener un marco conceptual crítico de todo lo que rodea a las personas no binarias, sumado a que situaremos la dimensión jurídica a la que se encuentran en diversas latitudes del mundo para tener las herramientas para abordar críticamente a la sentencia del Tribunal Electoral y poder escudriñarla en su justa dimensión e impacto.

### **Cuestiones preliminares: conceptos y contexto**

Para tener claridad conceptual es necesario dilucidar sobre algunos términos clave. En primer lugar, el concepto sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas a partir de los cuales se les clasifica como hombres o mujeres al nacer, mientras el término género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, geográfica, económica y políticamente han sido asignados a los hombres y mujeres. Por su parte, el concepto sexo asignado al nacer, parte de la idea de que el sexo no es un hecho biológico innato, sino una construcción sociocultural mediante la cual se les asigna a las personas un sexo al nacer (hombre o mujer), con base en la percepción que otras personas tienen sobre sus genitales.

No sobra decir que, la asignación del sexo al nacer es producto de la observación visual por parte de un profesional médico de los genitales de la persona recién nacida. Sin embargo, la biología del sexo no versa solamente sobre los genitales al nacer, pues involucra: cromosomas, hormonas, gónadas y cambios en la pubertad, algunos de los cuales pueden no ser “estrictamente binarios”; los cuales, se superponen a una estricta clasificación porque cambian a lo largo de la vida. Aunado a esto, los aspectos genéticos y hormonales del sexo no son fijos ni innatos porque están influenciados por el entorno y la experiencia a lo largo del tiempo. (Clarke, 2022, p.1854)

Por otro lado, conforme a los Principios de Yogyakarta, la identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del cuerpo, que podría o no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Asimismo, cuando la identidad de género de una persona coincide con el sexo que le fue asignado al nacer, se le denomina persona *cisgénero*. Esto quiere decir que cuando se etiqueta a una persona como hombre o mujer, la persona se identifica dentro de esta categoría. Por su parte, el término *expresión de género* se refiere a la manifestación externa del género de una persona, la cual puede ser impuesta, aceptada o asumida. Puede expresarse a través de las posturas, la forma de vestir,

los gestos, el lenguaje, el comportamiento y las interacciones sociales (Gómez, 2021, p. 298).

Otro concepto relevante es el consistente en el derecho a la identidad personal, concepto que define como aquel que tiene toda persona a ser ella misma, en la propia conciencia y en la opinión de otros. Esto es, este derecho se compone de la autopercepción, y cómo nos proyectamos en la sociedad (amparo directo civil 06/2008, p. 89), por lo que se encuentra relacionado con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, este último entendido como que a cada persona tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará las metas y objetivos que le son relevantes.

En la literatura sobre las identidades de género existen serias discusiones acerca de lo que significa ser una persona no binaria, pues eso dependería de la forma en que la identidad de género se relaciona con su cuerpo o con su orientación sexual. En esa línea, han surgido posibles distinciones entre lo que significa “el no binarismo de género”, “persona no binaria” y “experiencia no binaria”. El primer concepto tiene relación con el modo de vida, modo de ser, actitudes, espacios, discursos, ideología, perspectiva, entre otros que no encajan con lo masculino o femenino. Respecto al segundo concepto, se relaciona con un “... paraguas en el que convergen las personas que no se identifican con ser hombres o mujeres, al menos no de una manera absoluta y/o sostenida en el tiempo...”. Finalmente, el último concepto tiene que ver con “la experiencia propia de cualquier persona que rompe con los códigos binarios con relación al género, se identifique como se identifique la persona.” (López y Tobalina, 2022, pp. 28-38)

Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que “Ser una persona no binaria implica no identificarse plena y satisfactoriamente, de forma consistente y estable en el tiempo, con ninguna de las categorías disponibles, ni con las expectativas sociales relacionadas con cada una de ellas” (Gómez y Platero, 2017, p.124).

Esto es, las personas que se asumen como no binarias no se sienten identificadas con lo que conlleva ser masculino o femenino, ni mucho menos con las cargas sociales y culturales que estos conceptos representan. Por tal situación, la investigadora Ximena Salazar señala que las personas “al desafiar los preceptos de constitución de la identidad de género y contestar el sistema binario, van a sufrir las consecuencias de una identidad deteriorada; es decir, al desmontar los grandes relatos de identidad de la modernidad—especialmente los relatos del ser hombre y ser mujer—, padecerán exclusión, descrédito, discriminación y violencia...” (Salazar, 2015, pp-34-35).

En efecto, las personas que no se asumen como femenino o masculino, sufren una poderosa discriminación porque todo el mundo en el que viven gira en torno estos dos conceptos, pues desde el acceso a servicios públicos como el ejercicio de derechos y el desarrollo de su plan de vida debe girar en contorno con los mismos, por lo que, las personas no binarias sufren “su patologización, hecho que limita o niega sus derechos a la integridad personal, a la autonomía en los procesos de toma de decisión y a los que les corresponden como ciudadanos y ciudadanas” (Roa, y Garrido-Carrasco, 2019, p. 95).

En estudios recientes, se ha comprobado que el término no binarismo “... articula valores de apertura y movimiento, para otras, el mismo término puede suponer una

amenaza a estos valores, ya que también es concebido como instrumento de cristalización de una nueva identidad, que puede facilitar llegar a consensos que universalicen y legitimen algunas experiencias por encima de otras...” (López y Tobalina, 2022, p. 30). Resulta interesante que hay vertientes en sostener que el término binarismo resulta vacío justo para evitar la homogenización de ciertas conductas que puede llegar a resultar desiguales e incluso opresoras, pues el tener una definición clara podría excluir ciertos aspectos en aquello que no encuadre en el mismo.

El reto de darle contenido al concepto sumado a la confusión que hay entre los conceptos señalados anteriormente como sexo, género o identidad de género llevan a que las disposiciones jurídicas también tengan confusión a la hora de regular el tema. Por ejemplo, en Alemania a la hora de emitir un acta de nacimiento a un recién nacido se le puede registrar bajo el régimen de no binario sólo bajo criterios médicos que identifiquen los genitales del bebé, por lo que, si no es claro identificar el genital masculino o femenino se le fijará bajo el régimen no binario en su acta. Como vemos en dicha regulación alemana, se ata el concepto central al de sexo y no al de la identidad de género.

Caso contrario es el de Dinamarca, pues en dicho país se han introducido una serie de medidas para el reconocimiento de las personas no binarias. En 2014, se introdujo una nueva ley de reconocimiento de género que abolía requerimientos médicos (diagnóstico psiquiátrico o el uso de hormonas) para acceder al cambio de identidad de género, así como también se introdujo el indicador de género “X” como

posibilidad de identidad en el pasaporte y en el documento nacional de identidad. (Ellis y Bartalomé, 2020, p.20)

En esa línea, diversos países han incluido el indicador de género “X” como opción no binaria; por ejemplo, en Países Bajos el pasaporte contempla esa opción, en Malta tanto en el pasaporte como en el documento nacional de identidad se contempla también la elección “X” que significa “sin especificar”; caso similar sucede en Alemania con el documento nacional de identidad.

Tema especial es el caso de Suecia, en donde la formalización del género no binario se ha introducido a través de un cambio lingüístico institucional a través del pronombre de género neutro “hen” reconocido en el diccionario sueco. El mencionado pronombre se reintrodujo a inicios del milenio por los grupos transgénero que lo consideran útil y apropiado simbólicamente. Esto es una medida informal de omisión de género binario para garantizar una mayor inclusión.

Ahora bien, en México según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, hay 901 mil personas que se identificaron como transgénero, transexual, no binario, género fluido, agénero, entre otros; de las cuales, el 65 % de identifican como personas no binarias o de género diverso.

Recientemente, en México se han ejecutado una serie de medidas en materia jurídica para reconocimiento de las personas que se identifican como no binarias, pues el INE emitió un acuerdo en abril del 2023 que señala a quienes soliciten su credencial para votar solicitándolo como no binarias y presenten su documento de



identidad, ya sea acta de nacimiento o carta de naturalización en el que se les identifique como tal, se les expedirá la credencial con el identificador "X", tanto en el campo del sexo, como en los datos de información y control que se localizan en la credencial.

Por su parte, a las personas que soliciten su credencial para votar en la que se les reconozca como no binarias y no presenten su documento de identidad, se les expedirá la credencial con el identificador "X" únicamente en el campo de sexo, sin que se modifiquen los datos de información y control que se localizan en la credencial, tales como la clave de elector, la Clave Única del Registro de Población, la zona de lectura mecánica, entre otras; puesto que, para ello, es necesario contar con dicho documento de identidad que refleje esa identidad de género, a fin de que haya concordancia entre ambos registros.

Para estar en el primer supuesto y no en el segundo, se necesita llevar un procedimiento tanto jurisdiccional como administrativo para obtener un documento que se le reconozca la personalidad jurídica como no binario, ya que, si no se cuenta con dicho documento a la hora de solicitar su INE sólo puede ponerse en el sexo la "X" como reconocimiento de persona no binaria. Hay que tomar en cuenta que hasta hace un par de años a la fecha sólo algunas entidades federativas comenzaron a emitir actas de nacimiento con la opción de no binaria como Chihuahua, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León y Tabasco, algunas entidades obligadas a emitir las por mandato judicial.

Mención específica merece Hidalgo, que en noviembre del 2022 reformó su Ley para la Familia para reconocer y poder inscribir el género no binario en los

documentos que emita la Dirección del Registro del Estado Familiar o ante el Oficial del Registro del Estado Familiar de Hidalgo, convirtiéndose en una entidad federativa pionera que regula el tema.

Finalmente, mencionaremos que en mayo del 2023, se expidieron los primeros pasaportes a personas mexicanas que se identificaban como no binarias con el marcador “X”, uniéndose México a otros países que mencionamos líneas anteriores como Dinamarca o Países Bajos que reconocieron a las personas que se identifican como no binarias en un documento oficial como el pasaporte.

### **Hechos y resolución del asunto**

El 04 de febrero de 2022, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las convocatorias para la selección y designación de las consejeras presidentes de los OPLE de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz, así como de las consejeras y consejeros electorales de los OPLE de las entidades de Chiapas y Veracruz.

Esta convocatoria fue dirigida de forma exclusiva hacia mujeres, para que sólo ellas pudieran participar en la selección y designación de las consejerías de presidentes de los OPLE. Por ello, el 17 de febrero diversas personas que se autoadscriben como personas integrantes de la comunidad LGBTTTTIQ+ impugnaron dicho acuerdo por ser “discriminatorio por omisión, al no implementar acciones afirmativas para que su comunidad acceda al cargo de consejerías de OPLE, situación que sí

podría generarles una afectación a sus derechos político-electorales.” (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 4).

El reclamo de las personas que se identificaron como no binarias consistió en que bajo su visión la convocatoria que publicó el INE no las contemplaba para acceder a las presidencias de las consejerías de los OPLES. De tal forma que, la Sala Superior para dar contestación a los agravios planteados primero enfatizó que los órganos colegiados como los OPLES deben respetar el principio de paridad atado al mecanismo de alternancia (concepto flexible, ya que, responde a una dimensión cualitativa y no numérica para que las mujeres conformen órganos de dirección) porque con ello se garantizaba el derecho de igualdad en el acceso a los cargos públicos.

Por ello, la razón de esta convocatoria dirigida específicamente a mujeres estriba en que es una “...medida adecuada para alcanzar la paridad y reducir la brecha de desigualdad que ha subsistido en México respecto de ellas.” (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 7), medida que da respuesta a que “se ha considerado que las mujeres no sólo han sido discriminadas en el espacio político, sino también respecto de la ocupación de cargos de toma de decisiones al interior del servicio público y privado.” (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 7). Teniendo como resultado que las mujeres puedan acceder al más alto cargo de dirección en los institutos electorales locales.

No por nada, esta convocatoria se trata de una medida afirmativa, pues si los presidentes salientes fueron hombres, el INE está facultado para nombrar a mujeres como las personas que ocuparan dicho cargo, con ello se “busca contrarrestar la

desigualdad, discriminación y exclusión que han padecido las mujeres en el acceso a cargos públicos. Se orienta a conseguir la igualdad material entre hombres y mujeres, en el goce y ejercicio de sus derechos humanos.” (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 9). Esto es, la convocatoria justo plantea que las mujeres al acceder a puestos directivos se materialice la igualdad, pues históricamente las mujeres por razones estructurales han sido excluidas de aquellos puestos.

Respecto al argumento que vertieron consistente sobre que la convocatoria iba dirigida a mujeres cisgénero porque excluye otras identidades de género y afectan su libre desarrollo de la personalidad porque obligan a las personas a participar en un género del que no se sienten identificadas. Ante esto, la Sala Superior argumentó que es cierto que la convocatoria no señala que las mujeres trans puedan participar en convocatorias de mujeres, pero que en una interpretación *pro persona* e incluyente están consideradas para participar, pues de lo contrario, sería una medida discriminatoria. En sus palabras, apuntó lo siguiente:

De este modo, si la Convocatoria no hace un distingo o una exclusión respecto a las mujeres trans, se debe interpretar en sentido amplio y acorde a los mandatos constitucionales y convencionales en materia de igualdad, esto es, que está dirigida a todas las mujeres, sin importar si se trata de personas cisgénero, o transgénero. Además, para el caso de las personas no binarias permite que se inscriban bajo la identidad que corresponda a su decisión interna (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 11).

Más aún, en los formatos de inscripción está la opción de registrarse como persona no binaria, en una clara intención de proteger el derecho al libre desarrollo de la

personalidad de dichas personas. Así como reconocieron que la identidad sexo-genérica de las personas es una de una de las manifestaciones fundamentales de varios derechos como lo son la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad. Por ello, la mencionada convocatoria es una acción afirmativa para que las mujeres (trans o cisgénero) ocupen el cargo directivo, del que han sido excluidas históricamente e ir rompiendo los “techos de cristal”.

Por todo lo dicho anteriormente, la Sala Superior resolvió que la convocatoria es válida y no se discriminó a nadie. Sin embargo, exhortó al INE para que en casos futuros impulse el acceso o genere cuotas específicas para las personas de identidades sexo-genéricas diversas, pues en sus palabras “...el INE puede implementar cuotas en favor de las personas de identidades sexo-genéricas diversas o ponderar su inclusión con la paridad al designar consejerías de los OPLES, ya que a ello obliga la materialización del principio de igualdad” (SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO, 13).

Para ello, el INE debe ponderar en cada caso si es factible generar una cuota futura exclusiva para aquellas personas, esto es publicar en un futuro una convocatoria exclusiva para personas de diversas identidades sexo-genéricas tal como la del presente asunto. Asimismo, la Sala Superior resolvió que en las futuras convocatorias del INE se deberá emplear un lenguaje incluyente con la intención de que quede claro de manera expresa que las convocatorias no son exclusivas para las mujeres y hombres cisgénero.

**Regulación del principio de igualdad y no discriminación.**

En su artículo 24, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. Artículo que ha sido interpretado en el sentido de que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y como tal, es inseparable a la dignidad esencial de la persona. No obstante, no todo tratamiento jurídico que impone diferencias es discriminatorio porque no toda distinción de trato puede considerarse, por sí misma, una embestida a la dignidad humana.

De ahí que, sólo es discriminatoria una distinción cuando "carece de una justificación objetiva y razonable". Por ello, las distinciones pueden ser compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos sí son razonables, proporcionales y objetivas, mientras que las distinciones resultan ser discriminatorias cuando son diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. Así, los Estados tienen la obligación de no introducir y en su caso, eliminar de su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, combatir las prácticas de este signo y establecer normas y otras medidas que reconozcan, así como aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas (Jurisprudencia, 49/2016).

En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “...no toda diferencia de trato será reputada discriminatoria, sino sólo aquella que se base en criterios que no puedan ser racionalmente apreciados como objetivos y razonables, es decir, cuando no persigue un fin legítimo y no existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin perseguido.” (Corte

IDH. Opinión Consultiva OC-24/17: 2017). Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que, si los criterios de la diferencia no son objetivos y razonables, se presume una distinción discriminatoria, sobre todo si se cumple con lo siguiente:

Asimismo, en casos de tratos diferentes desfavorables, cuando el criterio diferenciador se corresponde con uno de aquellos protegidos por el artículo 1.1 de la Convención que aluden a: i) rasgos permanentes de las personas de los cuales éstas no pueden prescindir sin perder su identidad; ii) grupos tradicionalmente marginados, excluidos o subordinados, y iii) criterios irrelevantes para una distribución equitativa de bienes, derechos o cargas sociales, la Corte se encuentra ante un indicio de que el Estado ha obrado con arbitrariedad. (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17: 2017)

Esto es, si la distinción se funda en alguna de las características señaladas como ser un grupo históricamente marginado o si la persona posee un rasgo permanente, hay un fuerte indicio de que hay una diferencia arbitraria que resulta discriminatoria. Sumado a ello, la CoIDH considera que los criterios específicos del artículo 1.1 de la Convención Americana no constituye un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo, de ahí que, este tribunal sostiene que "...la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello, está proscrita por la Convención, cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual o en la identidad de género de las personas." (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-24/17: 2017).

Sumado a lo anterior, la CoIDH sostuvo que “En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”. (Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. 2016: párrafo 104) Así, se impone la obligación para que los Estados no tengan normas en su ordenamiento jurídico ni en su práctica que impongan restricción de derechos a las personas por el hecho de tener una específica orientación sexual.

Finalmente, la CoIDH señala que la discriminación indirecta implica que una norma o práctica aparentemente neutra tiene repercusiones particularmente negativas en una persona o grupo con unas características determinadas (Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, 2012: párrafo 286). En esa línea, una propuesta metodológica para conocer si estamos enfrente de una norma discriminatoria indirecta consiste en demostrar la existencia de una medida aparentemente neutral que causa un impacto adverso desproporcionado en una persona o grupo protegido; después hay que analizar si existe una justificación objetiva y razonable que, en general, se determina mediante el uso de un juicio de proporcionalidad. Así como, en los casos de discriminación encubierta, el ejercicio de adjudicación debe estar centrado en descubrir la verdadera intención que se esconde detrás de un velo de legalidad o de una facultad discrecional (Serrano, 2022, p.150).

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° dispone que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o



cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Texto del que se deriva el principio de igualdad y no discriminación, el cual ha sido desarrollado por los tribunales nacionales.

En un primer momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue entre la igualdad formal o de derecho, y la igualdad sustantiva o, de hecho. La primera consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Más aún, las posibles violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin que exista una justificación objetiva para ello.

Por su parte, la igualdad sustantiva o de hecho “radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos.”(Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 1464/2013). Por tanto, la violación a este principio surge cuando existe una

discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación. Sumado a esto, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social discriminado.

Aún más, el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico, por lo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio es incompatible con la Constitución. Sí, es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o se le discrimine del goce de derechos. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que “no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redundaría en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada.” (Jurisprudencia 09/2016).

Al obedecer el principio constitucional de igualdad jurídica, el Estado tiene la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus integrantes y el resto de la población, lo cual se logra a través de una serie de medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan como finalidad evitar

que se siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se les pueden catalogar como acciones positivas o de igualdad positiva.

Así es, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática, grupos que “se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías sospechosas que sirven como punto de partida para su identificación.”(Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 1464/2013). Uno de estos grupos, sin lugar a dudas son las personas no binarias.

En efecto, estas acciones positivas o afirmativas “...son regulaciones o políticas estatales que tienen como finalidad brindar un trato preferencial a una persona por ser ella parte de un grupo de individuos que ha sido —y sigue siendo— víctima de un trato excluyente, sistemático e histórico” (Saba, 2021, p. 90). Por su parte, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que una norma no es excesiva sino legítima, necesaria y proporcional, todavía puede ser necesario

analizar la misma bajo el principio de igualdad, por lo que en palabras del Tribunal Constitucional esto significa que:

Esto es, aunque una norma legal sea adecuada en el sentido de representar una medida globalmente apta para tratar de alcanzar un determinado fin, puede tener defectos de sobre inclusión o de infra inclusión, de los que derive una vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Incluso, en algunas ocasiones, por el tipo de criterio usado por la norma legal examinada (origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas) o por la extensión e intensidad de la incidencia en el goce de un derecho fundamental, será necesario examinar con especial cuidado si los medios (distinciones) usados por el legislador son adecuados a la luz del fin perseguido (Jurisprudencia 28/2011).

Finalmente, los derechos concernientes a la igualdad y a la no discriminación suelen transitar por tres ejes: 1) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas; 2) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas "acciones afirmativas"; y, 3) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de forma tácita, sean discriminatorios. Este tercer supuesto consiste:

...cuando una persona alega discriminación en su contra, debe proporcionar un parámetro o término de comparación para demostrar, en primer lugar, un trato diferenciado, con lo que se busca evitar la existencia de normas que,

llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación: i) una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas; o, ii) efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. Así, los casos de discriminación como consecuencia de un tratamiento normativo diferenciado exigen un análisis que se divide en dos etapas sucesivas y no simultáneas: la primera implica una revisión con base en la cual se determine si las situaciones a comparar en efecto pueden contrastarse o si, por el contrario, revisten divergencias importantes que impidan una confrontación entre ambas por no entrañar realmente un tratamiento diferenciado; y una segunda, en la cual se estudie si las distinciones de trato son admisibles o legítimas, lo cual exige que su justificación sea objetiva y razonable, utilizando, según proceda, un escrutinio estricto -para confirmar la rigurosa necesidad de la medida- o uno ordinario -para confirmar su instrumentalidad- (Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 83/2015).

De ahí que, nuestro Tribunal Constitucional nos ofrece un parámetro para evaluar cuando se vulnera el principio de igualdad y no discriminación, resaltando que para demostrar una violación a este principio debemos tomar un punto de referencia para demostrar que una situación de hechos similares tiene tratamiento diferenciado, por lo que es vital que se “exige como requisito previo al juicio de igualdad que se proporcione un término de comparación, esto es, un parámetro o medida válida a partir de la cual se juzgará si existe o no alguna discriminación y que sirva como criterio metodológico para llevar a cabo el control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas que se consideren contrarias al referido

principio.”(Jurisprudencia 47/2016). Seguido esto, se debe analizar si el trato diferenciado está justificado o no.

### **Análisis de la sentencia del Tribunal Electoral**

Un caso de referencia en donde se abordó el tema en cuestión sobre personas no binarias es la sentencia T-033/22 de la Corte Constitucional colombiana, caso en el cual una persona que había nacido de sexo masculino decidió tiempo después cambiar su sexo porque no se identificaba con el mismo, por lo cual, las autoridades le atribuyeron el de femenino. Sin embargo, la persona en cuestión tampoco se sentía identificada dentro de la categoría de femenino y a pesar de diversos tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas, tampoco tenía la apariencia de una mujer ni la de un hombre. Situación que le afectaba porque esto le provocaba no sólo burlas, sino también discriminación.

Tan es así que a la persona no la contrataban porque su apariencia no era acorde con los estándares de lo femenino tal como lo señalaban sus identificaciones. Peor aún, no recibía la atención médica correspondiente para tratar su próstata porque su carnet médico lo tenía como el sexo femenino, sexo que no tiene derecho a tratamiento de este órgano. Así, por dichos hechos y por no sentirse identificada como femenino o masculino, decidió cambiar sus documentos de identificación para que apareciera una “X” en el apartado del sexo, pues era una persona que no sentía identificación con el binarismo del sexo.

De tal forma que, la Corte Constitucional colombiana hizo un estudio profundo sobre los derechos afectados que tal situación provoca a las personas binarias. Por tanto,

primero analizó el alcance de lo que es la identidad de género, la cual “...es la definición de sí. Es la conciencia de lo que se es en el marco de un conjunto social. Se construye en el curso de la vida humana y, conforme las experiencias personales, se reconfigura. Esta noción de sí mismo resulta trascendental, en tanto sitúa al sujeto en la sociedad, en la familia y en todos los ámbitos en los que se desenvuelve” (Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-033/22, párrafo 27). Más aún, la falta de identidad “...supone la reducción de las posibilidades de que el ser humano participe en la dinámica social” (Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-033/22, párrafo 27).

Por eso, dicho tribunal constitucional sostuvo que la identidad de género es un constructo individual, que estriba de las elecciones personales de la persona en relación con la forma de vivir su propia sexualidad tanto en el plano personal como en su proyección al exterior. De ahí que, también definió la identidad no binaria como que “...es comprendida como aquella que, al no concebirse en el marco de las categorías dicotómicas, masculino o femenino, se aleja del sistema mayoritario de sexo-género, binario por tradición cultural. Las personas no binarias no se encuentran representadas, en sus vivencias, por ninguna de las categorías de género existentes en ese sistema” (Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-033/22, párrafo 44).

En efecto, las personas no binarias no se sienten identificadas ni con el masculino ni con el femenino. Más aún, las identidades no binarias albergan muchas subcategorías; una de las cuales está conformada por las personas que se identifican con un género diferente al femenino o el masculino. Otra categoría, por

quienes se denominan “agénero” de suerte que asumen que no tienen una identidad compatible con ningún género, así como la categoría en donde se encuentran las identidades fluidas cuyo ser está definido por la adscripción a un género binario, aunque no de forma permanente.

Por ende, la Corte Constitucional colombiana sentencia que al no reconocerle a la persona su estatus no binario, no lo reconoce como un sujeto que tiene vivencias propias que construyen su identidad de género, esto es una clara violación de varios derechos de la persona como el de tener personalidad jurídica. En sus palabras, dicho tribunal argumento que:

...la norma que limita los marcadores de sexo a aquellos binarios desconoce a la persona accionante su vivencia y su experiencia de género que se constituye al margen de ellos. Obstaculiza así su derecho a la personalidad jurídica, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad de la parte accionante. También, la expone a múltiples escenarios de discriminación en su contra a causa de la falta de correspondencia entre su autopercepción y una opción de género impuesta (Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-033/22, párrafo 61).

Por tal motivo, una persona a la que no se le reconoce su propia experiencia y vivencia, las cuales no se identifican ni con masculino o femenino, entonces es una persona que sufre una profunda discriminación. Por ende, en el caso concreto de la convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres que emitió el INE respecto a ocupar la presidencia de los OPLES, el Tribunal Electoral resolvió que, de una interpretación amplia, la convocatoria no va dirigida de forma exclusiva para mujeres



que se identifican como tal, sino que también incluye a personas trans u otras personas con afinidad al sexo-género femenino.

Sin embargo, el Tribunal Electoral asume que las personas trans o demás identidades de género se van a asumir como mujeres o dentro del grupo de femenino, lo cual, es una equivocación y discriminación para estas personas. Así es, las personas que acudieron a la justicia electoral se identifican como no binarias, por ende, no se identifican ni en el concepto de femenino ni el de masculino, en ninguno de los dos. Por tal razón, alegaron sentirse discriminados porque la convocatoria no iba dirigida a estas personas, sino a mujeres que se identifican con el femenino, situación en la que no se encuentran.

De ahí que, la discriminación continua a pesar de la interpretación amplia porque el Tribunal Electoral quiere encuadrar a las personas no binarias dentro del género femenino, lo cual es un contrasentido, pues por definición dichas personas no se encuadran dentro de los dos géneros. Así, la justicia electoral al resolver el caso no busco la igualdad de hecho que consiste en derrumbar todas aquellas barreras que impiden a los grupos históricamente marginados –como lo son las personas no binarias- acceder a las mismas oportunidades, ya que, no ordeno que hubiera una convocatoria exclusiva para que dichas personas no binarias pudieran acceder a las presidencias de los OPLES, por el contrario, las encuadra en la convocatoria exclusiva a mujeres.

Es cierto que, la convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres es una acción afirmativa que busca el que un grupo históricamente marginado como el de las mujeres pueda acceder a los puestos de dirección. También es de reconocer que el

Tribunal Electoral con su interpretación amplia, lo que hizo fue valorar si esta acción afirmativa pudo ser catalogada como infra inclusiva, en el sentido de saber si otras identidades de género pudieran entrar dentro del concepto de mujeres o femenino. Sí, sin decirlo explícitamente, la justicia electoral sentenció que la convocatoria exclusiva de mujeres podía llegar a ser una medida infra inclusiva si no se incluían a las personas trans o de otra identidad de género como beneficiarias de la acción para concursar por la presidencia del OPLE.

No obstante, no es que la acción afirmativa fuera infra inclusiva, sino que la acción afirmativa sí excluía a las personas no binarias desde la forma en qué fue dirigida. En efecto, la convocatoria en cuestión iba dirigida a mujeres o dentro del género femenino, lo cual, no incluía a las personas no binarias. La interpretación extensiva del Tribunal Electoral no borra la discriminación, pues invisibiliza a las personas no binarias al encuadrarlas con un género binario. En todo caso, el Tribunal Electoral hubiera razonado que esta convocatoria iba dirigida tanto a mujeres como a personas no binarias, para ambos grupos y no incluir este último dentro del primero.

De tal forma que, el Tribunal Electoral al señalar que las personas no binarias pueden inscribirse al género que mejor les acomode, es no entender que dentro de las personas binarias hay subcategorías y que casi todas comparten que no se identifican como masculino o femenino, tal como bien apunto la Corte Constitucional colombiana. Por tanto, es un sinsentido señalar que las personas no binarias tienen la posibilidad de inscribirse dentro del género masculino o femenino para ocupar la presidencia del OPLE, por la sencilla razón, de que no se identifican con ninguno de los dos géneros.

Bien señala la Corte Constitucional colombiana al decir que sí no se reconoce a las personas no binarias su estatus como tal, entonces no se les reconoce su identidad de género construida a partir de sus propias vivencias, lo cual resulta no sólo en una discriminación, sino también en la violación a sus derechos como lo son la personalidad jurídica, a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, la sentencia del Tribunal Electoral sigue invisibilizando y perpetuando la discriminación al no buscar una igualdad de hecho para que las personas no binarias ocupen puestos de dirección.

Peor aún, el Tribunal Electoral al esbozar semejante conclusión al incluir a las personas que se identifican como no binarias dentro de la categoría de mujeres, lo que mostro es desconocimiento conceptual porque las personas que se autodescriben como no binarias ejercen su identidad de género y no quieren encuadrarse dentro del término de mujeres tanto cisgénero o trans, clasificación distinta que no toma en cuenta su propia identidad.

Sumado a esto, la decisión del TEPJF no discute los alcances del significado de personas no binarias, perdió una oportunidad dorada de tratar de delimitar elementos mínimos de las personas que no se identifican con masculino o femenino en el ámbito político-electoral, y al no realizar este primer paso, trajo como consecuencia implícita que su desconocimiento como grupo independiente a lo binario también se le excluyó de un análisis propio que narrará las históricas discriminaciones de este grupo -hasta hace un par de años, ningún documento oficial los reconocía jurídicamente-, con lo cual, también se le privó a estas personas a ser merecedoras a futuras acciones afirmativas exclusivas que los empoderen.

## **Conclusión**

Como analizamos en líneas anteriores, la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral abordó un tema novedoso respecto al alcance que tiene una acción afirmativa dirigida para beneficiar exclusivamente a mujeres para que accedan a puestos de dirección dentro de las autoridades administrativas electorales y con esto, distinguir si se incluían o no a las personas no binarias como beneficiarias de esta acción. En caso de concluir de que no se contemplaban a las personas no binarias resultaría en una medida excluyente y discriminatoria, razonamiento al que no concluyó bajo el argumento de una interpretación amplia de lo que se describe del concepto de mujeres.

Una interpretación amplia del concepto mujeres que resultó errónea porque quiere incluir dentro de un género a personas no binarias que por el núcleo de su identidad de género no se identifican ni como mujeres ni con femenino o masculino. De ahí que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir una sentencia con ese rumbo, lo que hizo fue justo lo que quería evitar y que fue el excluir e invisibilizar a las personas no binarias.

A nuestra consideración, el Tribunal Electoral careció en su sentencia de un robusto estudio sobre los conceptos de sexo, género, identidad de género y de personas que se identifican como no binarias, pues si lo hubiera realizado, la sentencia tuviera claridad conceptual que le permitiría comprender que el binarismo por definición no puede incluirse dentro de lo femenino, sector al que iba dirigido la acción afirmativa. Al no hacer un intento por delimitar al no binarismo también desconoció la profunda discriminación que sufren las personas que se identifican así, por lo cual, perdió una

valiosa oportunidad para que las autoridades electorales busquen implementar acciones afirmativas a un grupo históricamente invisibilizado y discriminado.

Finalmente, el Tribunal Electoral dejó desfilan una oportunidad para continuar en la vía del reconocimiento jurídico del no binarismo, reconocimiento que se está dando hasta hace un par de años recientes en México. Es cierto que en el mundo es un tema regulatorio por demás reciente porque ante todo hay distintas visiones conceptuales que no dan claridad para regular el tema, sin embargo, el camino a seguir es buscar pisos mínimos definitorios que permitan implementar acciones tendentes a reconocer el no binarismo mediante actos jurídicos concretos que den personalidad jurídica a las personas que se encuentren en dicho caso, camino que no fue abonado con esta sentencia zanjada por el Tribunal Electoral.

## **Bibliografía**

### Acuerdos

- ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina viable la incorporación del dato en la credencial para votar que reconozca a las personas no binarias, en acatamiento a las sentencias dictadas en los expedientes SM-JDC-396/2020 y SM-JDC-1011/2021 por la

Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como, que se identifique en la Credencial para Votar como persona no binaria solo en el apartado de sexo, a quienes manifiesten su deseo de que se les reconozca con ese carácter sin presentar documento de identidad. 19 de abril de 2023.

#### Artículos de revistas académicas y de libros.

- Clarke, Jessica (2022). Sex Assigned at Birth. Columbia Law Review. Vol. 122.
- Ellis Paloma y Bartolomé Eburne (2020). La condición de No Binario en la legislación europea: estudio comparativo sobre definiciones y marcos legales y políticos. INGURUAK.
- Gómez, Haydeé (2021). El derecho a la identidad de género. Una mirada a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Martínez, Alejandra (coord.) Los derechos de la diversidad sexual. Un diálogo entre la Suprema Corte, la academia y la sociedad civil (291-333). México, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Gómez, I. L., y Platero, R. L. (2017) ¡Faltan palabras! Las personas Trans\* No binarias en el Estado español.
- López Isabel y Tobalina Gorka (2022). Estudio sobre las necesidades y demandas de las personas no binarias en España. MINISTERIO DE IGUALDAD, Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI. Centro de Publicaciones. Madrid.

- Roa, M. Á. B., y Garrido-Carrasco, C. (2019). Discriminación hacia personas transgénero: desafíos para un trabajo social en derechos humanos. *Revista Intervención*, 9(1).
- Saba, Roberto (2021). Las acciones afirmativas y las dos caras de la igualdad. En Ibarra, Ana María (coord.). *Discriminación. Piezas por armar* (81-141). México, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Salazar, X. (2015). La transgeneridad: identidades y movimiento social. *Argumentos*, 2(9).
- Serrano, Silvia (2022). Una mirada comparada a la discriminación indirecta: consensos, divergencias y desafíos. En García, Daniel (coord.). *Construir la Igualdad. Reflexiones en clave judicial*. (139-187). México, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

#### Documentos internacionales

- Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2007), Yogyakarta.

#### Encuestas

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). *Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG)*. México: INEGI.

#### Opiniones consultivas

- Corte IDH. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017. Serie A No. 24.

#### Sentencias.

- Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. SUP-JDC-74/2022 Y ACUMULADO. 30 de marzo de 2022.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (2009), amparo directo civil 06/2008.
- Corte Constitucional Colombiana. Sentencia T-033/22. 4 de febrero de 2022.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012). Caso Artavia Murillo y Otros ("Fertilización In Vitro") vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de noviembre.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016.

#### Tesis de jurisprudencia y aisladas.

- Jurisprudencia 28/2011. Escrutinio de Igualdad y análisis constitucional orientado a determinar la legitimidad de las limitaciones a los derechos



fundamentales. Su relación. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Novena Época. Agosto de 2011.

- Jurisprudencia 09/2016. Principio de Igualdad y No Discriminación. Algunos elementos que integran el parámetro general. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Septiembre 2016.
- Jurisprudencia 47/2016. Igualdad. Son inoperantes los conceptos de violación en los que se alegue violación a dicho principio, si el quejoso no proporciona el parámetro o término de comparación para demostrar que la norma impugnada otorga un trato diferenciado. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Septiembre de 2016.
- Jurisprudencia 49/2016. Igualdad Jurídica. Interpretación del artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Octubre de 2016.
- Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 1464/2013. Derecho Humano a la Igualdad Jurídica. Contenido y alcances de su dimensión sustantiva o de hecho. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Febrero de 2014.
- Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 1464/2013. Derecho Humano a la Igualdad Jurídica. Diferencias entre sus modalidades conceptuales. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Febrero 2014.
- Tesis SCJN, Amparo directo en revisión 83/2015. Derechos Fundamentales a la Igualdad y a la No Discriminación. Metodología para el estudio de casos que involucren la posible existencia de un tratamiento normativo

diferenciado. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época*. Tomo I. Enero 2017.